



GD-F-008 V.9

Página 1 de 5

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010039235 DEL 28/03/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el Municipio de APULO del Departamento de CUNDINAMARCA, es de categoría 6 y como no fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010052375 del 30 de septiembre de 2016, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al Municipio de APULO del Departamento de CUNDINAMARCA, por no haber cumplido el siguiente requisito previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya.”

La Resolución No. SSPD 20164010052375 del 30 de septiembre de 2016, se notificó personalmente el 1 de noviembre de 2016, al alcalde municipal de APULO.



El Municipio APULO mediante el documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20165290785652 del 17 de noviembre de 2016, presentó oportunamente recurso de reposición en contra de la citada resolución.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1 Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

“CONSIDERACIONES DEL MUNICIPIO

Debo inicialmente manifestar que el objeto del proceso de certificación es evaluar la capacidad del municipio o distrito de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en su jurisdicción, a partir de una adecuada administración y uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, situación que a la fecha cumple a cabalidad nuestro municipio y que se puede constatar a través de los reportes que se hacen a los sistemas de información.

Ahora bien, la Ley 1176 de 2007 establece un sinnúmero de requisitos que deben cumplir los municipios que no prestan directamente los servicios públicos domiciliarios, y, es aquí en donde debo insistir que la certificación o descertificación opera para evitar la administración de los recursos de la siguiente vigencia del periodo a certificar, es decir si estamos hablando de descertificar al municipio previa evaluación del cumplimiento de los requisitos de ley para el año 2015 y se produce en el 2016, quiere decir que los recursos objeto de administración que deben afectar serán los del año siguiente al 2015.

El art. 5 de la Ley 1176 de 2007 consagra: Los distritos y municipios que sean descertificados no podrán administrar los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones, ni tampoco realizar nuevos compromisos con cargo a los mismos, a partir de la fecha de la descertificación. En este evento, los recursos serán administrados por el respectivo departamento, el cual asumirá la competencia en cuanto a asegurar la prestación los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en la zona urbana y rural, conforme con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 142 de 1994. Para ello, el departamento tendrá el derecho a utilizar la infraestructura pública existente en el municipio con el fin de asegurar la prestación de estos servicios públicos en la correspondiente jurisdicción. En ningún caso se realizará la transferencia de la propiedad de los activos del sector, y corresponderá al departamento representar al municipio en las empresas, sin perjuicio de que este participe con voz pero sin voto.

Visto lo anterior, la norma es clara al consagrar que se afectaran los recursos a partir de la fecha de la descertificación, y no consagra hasta cuando, no puede ser de todas las vigencias, solo se debe afectar los recursos de la vigencia seguida al año a certificar, para el caso concreto nuestro municipio ha sufrido por una irresponsabilidad de la Administración anterior al no subsanar en tiempo lo atinente a la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y servicios públicos domiciliarios de acueducto, aquí Señor Superintendente se están afectando los recursos de la vigencia 2017 que no corresponde al espíritu de la ley, la sanción va más allá de lo contemplado en la norma.

De igual forma los reportes del FUT y SUI que consagra la norma deben darse cumplimiento están acordes con lo ordenado, el municipio se encuentra al día en cada uno de los reportes, tan pronto tuvimos conocimiento de la falta del ajuste al acuerdo que fija los subsidios inmediatamente se convocó al Honorable Concejo para que aprobara de acuerdo a la tabla establecida por el Gobierno Nacional todo lo concerniente a los porcentajes de los subsidios, no se puede castigar de esta manera una Administración Municipal que ha hecho todo un gran esfuerzo por cumplir con lo establecido en la norma afectando los recursos de dos vigencias cuando lo normal es que se sancione para la siguiente al año a certificar.

Ahora, si miramos el título de la resolución en comento, podemos observar sin mucho esfuerzo que la resolución está dirigida a: “Por la cual se decide sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico SGP-APSB, correspondiente a la vigencia 2015” claramente nos determina que es para la vigencia 2015 y no para recursos de la vigencia 2017 como aquí se pretende afectar.”

2.2. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el radicado bajo el No. 20165290785652 del 17 de noviembre de 2016, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, no se allegaron documentos para que fueran tenidos en cuenta como pruebas.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

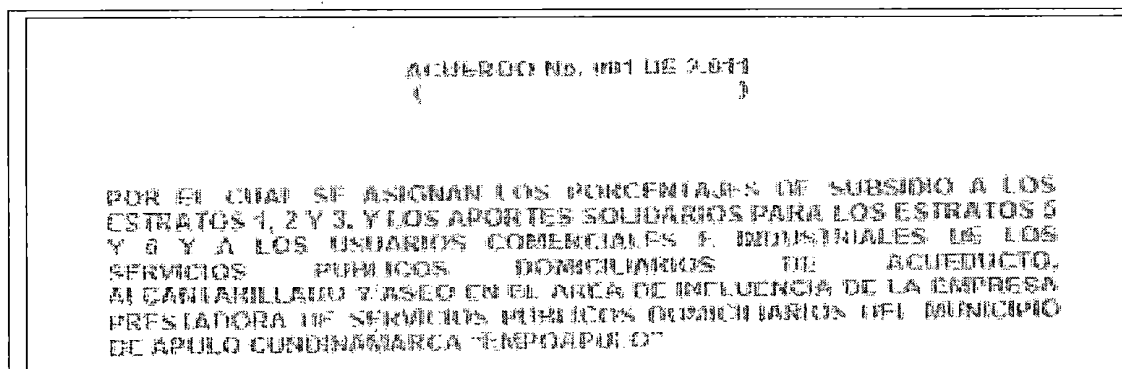
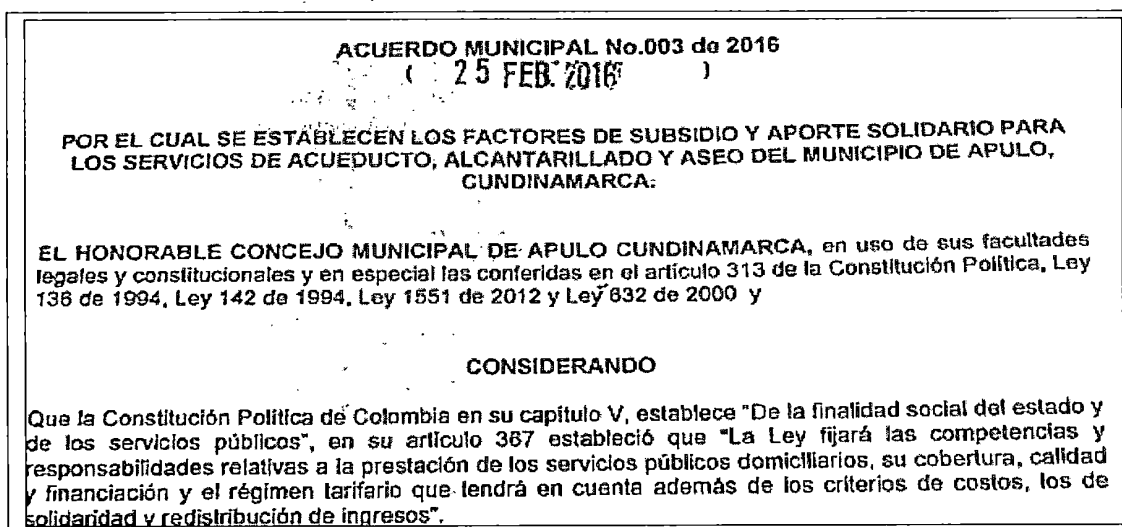
Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el “Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.”

El municipio incumplió éste requisito, debido a que reportó en el SUI los Acuerdos Municipales Nos. 003 del 22 de febrero del 2016 y 001 del 10 de mayo del 2011, pero ninguno rigió para la vigencia evaluada, es decir para el año 2015.

Al respecto manifiesta el recurrente, que la norma es clara al consagrar que se afectarían los recursos a partir de la fecha de la descertificación, pero que no señala hasta cuándo; en este sentido estima que solo se deben afectar los recursos de la vigencia seguida al año a certificar, pero que con la decisión adoptada se están afectando los recursos de la vigencia 2017, lo que no corresponde al espíritu de la ley, por ello considera que la sanción va más allá de lo contemplado en la norma.

También pone de presente, que se encuentran al día en cada uno de los reportes en el SUI y en el FUT y que tan pronto se tuvo conocimiento de la falta del acuerdo que fija los subsidios y las contribuciones, inmediatamente se convocó al Concejo Municipal para que lo aprobara de acuerdo a la metodología señalada por el Gobierno Nacional y que por tanto no se puede castigar de esta manera una administración municipal que ha hecho un gran esfuerzo por cumplir con lo establecido en la ley.

Pues bien, de cara a los argumentos del impugnante esta Entidad procedió a verificar lo consignado en la resolución que se recurre, encontrando que efectivamente el Municipio de Apulo reportó en el SUI los siguientes Acuerdos de los cuales ninguno estuvo vigente en el 2015, como se observa a continuación:



A través de la estratificación, se clasifica a la población según sus condiciones socio-económicas, a efectos de permitir que la redistribución del ingreso y el principio de solidaridad que deben imperar en el régimen de tarifas para los servicios públicos domiciliarios se cumplan efectivamente (artículo 367 de la Constitución). La Ley 142 de 1994 en este caso, hace uso de este mecanismo para determinar qué

sectores de la población deben además de pagar los costos propios de los servicios públicos de que son usuarios, asumir un pago extra, a fin de colaborar con ese otro sector de la población que no tiene los recursos suficientes para cubrir los costos reales de estos servicios.

En este orden de ideas, la Ley 1450 del 16 de junio 2011, ha determinado unos porcentajes máximos de subsidios y mínimos de contribuciones que los municipios deben observar a la hora de expedir el acto administrativo que los establezca, además de señalar que dichos factores aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años¹, pero tal disposición aplica para aquellos Acuerdos expedidos en vigencia de esta norma.

No obstante, en el presente asunto tenemos que el Acuerdo No. 001 del 10 de mayo del 2011, fue expedido antes de la entrada en vigencia de la Ley 1450, razón por lo cual no le es aplicable el término de los 5 años arriba mencionado, puesto que antes de la ley en comento, estos Acuerdos debían tramitarse anualmente.

Por su parte, es indiscutible que el Acuerdo Municipal No. 003 del 23 de febrero del 2016, no rigió para el año 2015, lo cual nos permite concluir que en la vigencia evaluada no hubo un acto administrativo que regulara lo concerniente a los subsidios y las contribuciones conforme a lo dispuesto por la Ley 1450 del 2011, motivo por el cual se ratifica lo consignado en la resolución que se recurre sobre el particular.

Así las cosas, no es posible en el caso que nos ocupa validar ninguno de los acuerdos municipales reportados por las razones expuestas, teniendo en cuenta además que la decisión de descertificación no se expide respecto de una administración, sino del municipio.

En lo referido a los efectos de la descertificación es menester señalar que el artículo 2.3.5.1.2.1.12. del Decreto 1077 de 2015, dispone que:

"Los municipios y distritos que como resultado del proceso a que se refiere esta sección sean descertificados, no podrán administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico ni realizar nuevos compromisos con cargo a los mismos, desde la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo en que se decida la descertificación, expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En consecuencia, los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico asignados al municipio o distrito descertificado, serán administrados por el departamento que asuma las competencias previstas en el artículo 5° de la Ley 1176 de 2007 o la norma que la modifique, complemente o sustituya."

En este orden de ideas, se tiene que los efectos de la descertificación se verán reflejados desde la fecha de su ejecutoria y cesan en la medida que se expida un nuevo acto administrativo certificando al municipio, es decir, que los efectos de la descertificación concluyen una vez el municipio en el proceso de certificación siguiente al que decidió descertificarlo, cumpla con los aspectos que la norma dispone en forma y término y como resultado de ello se produzca una resolución que decida certificarlo.

Para el caso de Apulo, una vez verificado el expediente del ente territorial fue posible establecer que éste se descertificó en el año 2015, dentro del proceso que evaluó la vigencia 2014; ahora bien, respecto de la vigencia 2015 examinada en este año, la descertificación persiste y por tanto sus efectos, de tal suerte que sólo se extinguirán hasta que el municipio logre certificarse.

Para finalizar, se aclara al recurrente que el proceso de certificación reviste una función meramente administrativa por medio de la cual la SSPD revisa la información que el municipio reporta para acreditar el cumplimiento de los aspectos señalados en el Decreto 1077 de 2015, por esto dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria; además la decisión de descertificación es una medida legal, según la cual la administración de los recursos del SGP – APSB pasa del municipio al departamento, el cual está encargado de realizar todas las gestiones que sean necesarias para que se garantice la prestación eficiente de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento básico a todo el municipio.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no cumplió el requisito relacionado con el reporte en el SUI del acuerdo de subsidios y contribuciones y por lo tanto el recurso formulado por el señor Gustavo García Bernal, como representante legal del Municipio de APULO, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

En mérito de lo expuesto, se

¹ Ley 1450 del 2011. Artículo 125, parágrafo primero: "Los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, no obstante estos factores podrán ser modificados antes del término citado, cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones."

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010052375 del 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.


ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del Municipio de APULO del Departamento de CUNDINAMARCA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente Resolución al gobernador del Departamento de CUNDINAMARCA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS
Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Vanessa Benavides -- Abogada contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: Andrés Felipe Saavedra Reyes -- Abogado Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 2016401351600587E